



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, primero de julio de dos mil veintidós**

**A22-041**

<b>PROCESO:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL – APELACIÓN AUTO</b>
<b>DEMANDANTE:</b>	<b>SONIA HELENA PALACIO ESPINAL</b>
<b>DEMANDADOS:</b>	<b>COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.</b>
<b>RADICADO:</b>	<b>05001-31-05-016-2017-00504-01</b>
<b>DECISIÓN:</b>	<b>REVOCA: deja sin efectos conciliación</b>

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones dentro del proceso de la referencia contra el auto dictado el 27 de septiembre de 2019 mediante el cual se aceptó y aprobó una conciliación.

Conforme el contenido de los memoriales que anteceden y la Escritura Pública 3377 suscrita el 2 de septiembre de 2019 ante la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, se reconoce personería a la Dra. **ÁNGELA MARÍA SIERRA ALVANES**, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.017.160.002 y T.P. N° 232.841 expedida por el C.S. de la J., en los términos de la sustitución de poder otorgada por el Dr. **RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES**, representante legal de la firma **RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.**, para que continúe representando los intereses de Colpensiones.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 20** de discusión, que se adopta como decisión, en los siguientes términos:

**1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

La señora Sonia Helena Palacio Espinal promovió demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones y Protección S.A. solicitando, en síntesis, que tras la declaratoria de INEFICACIA del traslado a la administradora del RAIS, se tuviera como válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad, ordenándose a Protección S.A. devolver todo el capital existente en la cuenta de ahorro individual como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses. Igualmente solicitó a Colpensiones validar dichos aportes y reconocer la PENSIÓN DE VEJEZ desde la fecha de causación, 15 de diciembre de 2016, junto con las mesadas ordinarias y adicionales, además de los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Admitida la demanda, se pronunciaron tanto Colpensiones como Protección S.A. contravirtiendo el derecho pretendido, la última de ellas, en síntesis, negando el incumplimiento del deber de información.

Mediante auto del 31 de julio de 2019, el titular del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín decretó de oficio la acumulación de tres procesos, entre ellos este, por considerar que se cumplían los presupuestos establecidos en el numeral 1) del artículo 148 del Código General del Proceso, pero continuó el respectivo trámite bajo el radicado 05001-31-05-016-2017-**00945**-01.

Dentro de la audiencia de trámite y juzgamiento, llevada a cabo el 27 de septiembre de 2019, se emitió sentencia sólo frente a uno de los tres procesos acumulados, en los dos restantes, incluyendo el que aquí ocupa la atención de la Sala, el juzgado aceptó y aprobó la conciliación, ordenando la terminación del proceso, dado el allanamiento a las pretensiones que formuló Protección en dicha audiencia, declarando legalmente la ineficacia de cada afiliación y ordenó a dicha administradora del RAIS devolver al régimen de prima media todos los recursos que se encontraran en la cuenta, recibidos con motivo de la afiliación, incluyendo *las cotizaciones de forma completa, los bonos pensionales, cualquier suma adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos administrativos ni los aportes de solidaridad ni ningún concepto que haya recibido con ocasión del traslado*. También ordenó a Colpensiones reactivar la afiliación, recibir los dineros ordenados y *realizar el estudio de la pensión de vejez*.

Frente a esta decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación, concedido por el a quo en efecto suspensivo, entidad que al sustentarlo destacó su calidad de parte y la inexistencia de su ánimo conciliatorio.

El 4 de agosto de 2021, en ejercicio del control de legalidad, esta Sala ordenó al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín que impartiera el trámite pertinente y por separado a cada uno de los procesos que cursaron bajo los radicados 05001-31-05-016-2017-00945-01, 05001-31-05-016-2017-00504-01 y 05001-31-05-016-2017-00948-01, procediendo con su individualización, y si era del caso, los enviara por separado a esta instancia para resolver en cada uno los recursos de alzada, pues como se dijo, en dos se impartió aprobación a una conciliación, en otro se emitió sentencia que también fue objeto del recurso de alzada, tocándose asuntos disímiles.

El 2 de diciembre de 2021 el juzgado dio cumplimiento a lo resuelto y procedió con la desacumulación los procesos, siendo repartido a esta Corporación el día de 17 de febrero de 2022, para efectos de resolver el recurso de apelación formulado por Colpensiones contra el auto emitido el 27 de septiembre de 2019.

Fue así como mediante auto del 16 de junio del año en curso, se admitió el recurso de apelación conforme lo previsto en el numeral 7 del art. 321 del CGP según el cual es apelable el auto que *por cualquier causa le ponga fin al proceso*.

## **2. RECURSO DE APELACIÓN COLPENSIONES**

Destaca que fueron vinculados como demandados, es decir, la entidad ostentaba la calidad de parte y aunque nada tuvo que ver de cara al acto jurídico respecto del cual se suscitaba la ineficacia, lo cierto es que los efectos estarían llamados a ser acarreados por Colpensiones. Añade que dentro del plenario reposaba concepto del Comité de Conciliación y Defensa Judicial a través del cual NO se propuso fórmula conciliatoria, por lo que el despacho estaba desconociendo la posición oficial de la entidad que, insiste, NO tenía ánimo conciliatorio, dejando de lado la actividad procesal de una de las parte vinculadas al proceso.

## **3. ALEGATOS**

Se pronunció tanto Colpensiones como la parte actora. No obstante, se torna innecesario transcribirlos o reseñar lo allí escrito toda vez que nada dijeron respecto de la cuestión objeto de litigio, es decir, el auto que imparte aprobación a una conciliación, dado que las consideraciones de la entidad se centraron en la improcedencia de declaratoria de ineficacia de cara a lo normado

en el art. 2 de la Ley 797 de 2003 y el impacto al principio de sostenibilidad financiera, solicitando finalmente NO coger la sentencia proferida, la que ciertamente NO ha sido emitida. Igual situación se predica de la demandante, al solicitar la confirmación del fallo aduciendo que luego del debate probatorio, etapa que no se evacuó, se constató el incumplimiento al deber de información, aspecto que supuestamente reiteró la actora en el interrogatorio absuelto, el que tampoco se practicó.

#### **4. CONSIDERACIONES**

La conciliación se instituyó como una de las formas de materializar el principio de la autonomía de la voluntad, toda vez que las partes, en ciertos asuntos, son libres de aislar al Estado (a quien por regla general se le asignó esa función jurisdiccional para solucionar sus conflictos), suscribiendo la correspondiente acta de conciliación, la cual presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.

Fue precisamente ello lo que sucedió, donde una de las partes resistentes manifestó su allanamiento respecto de los efectos que para el caso contempla la jurisprudencia frente aquellos procesos donde se pretende la ineficacia del acto de afiliación a través del cual una persona se traslada al RAIS; en otras palabras, se dio una conciliación judicial (dentro del proceso).

El problema surge es cuando el proceso se termina pese a la resistencia de una de las entidades codemandadas, toda vez que Colpensiones, a la que se le ordenó reactivar la afiliación al régimen de prima media con prestación definida, así como recibir todos los dineros que fuesen trasladados y analizar la viabilidad de la concesión de una pensión de vejez, decidió NO PROPONER FÓRMULA CONCILIATORIA. Ello se manifestó en la correspondiente etapa de aquella audiencia regulada en el art. 77 del CPT y la SS, llevada a cabo el 27 de septiembre de 2019, momento para el cual ya reposaba en el plenario el documento contentivo de la certificación Nro. 81654 emitida el 12 de diciembre de 2017 por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, cuya copia obra a folios 208 y 209 del expediente digital, a través del cual manifiesta que:

“(…) dicho órgano decidió de manera unánime:

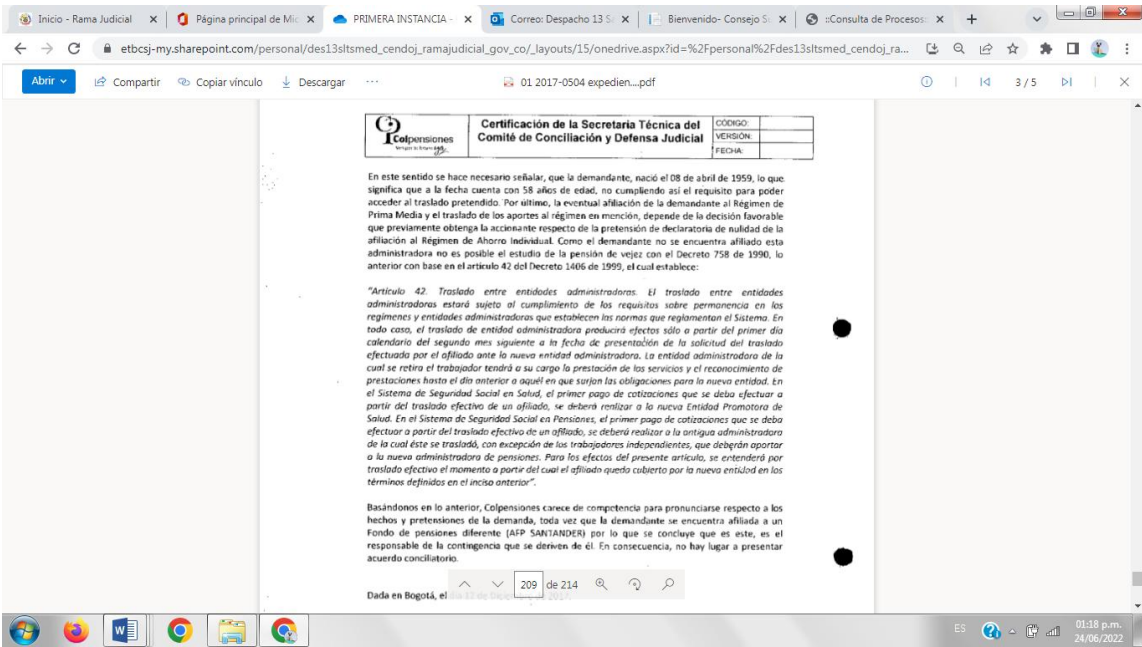
NO proponer fórmula conciliatoria por las siguientes razones:

Revisada la Historia Laboral de la demandante y en especial el certificado de afiliación, se evidencia que la misma presenta un traslado al Régimen de Ahorro Individual administrado por PROTECCIÓN S.A., desde el 01 de septiembre de 2000, lo que

significa que, a la fecha, el traslado efectuado tiene plena validez y respecto a la nulidad del contrato alegado por la accionante, deberá probarse en el desarrollo del proceso judicial.

(...) se hace necesario mencionar lo establecido en la Ley 797 de 2003...”

Y continúa indicando que:



Nótese entonces, que pese a la oposición a las pretensiones, se imparte trámite a una conciliación en la que incluso se emiten órdenes que Colpensiones debe acoger, y que necesariamente tienen un impacto mucho más profundo, como lo expone la recurrente, pues la reactivación de la afiliación acarrea el consecuente reconocimiento y pago de las diversas prestaciones económicas que contempla el régimen pensional, especialmente en este caso donde precisamente la pensión de vejez se enuncia como una de las súplicas del libelo genitor. Así pues, ese traslado y la ineficacia que sobre el mismo se pretende, pese a que en efecto es un acto jurídico ajeno a Colpensiones, que desde tal óptica es un tercero, tiene grandes connotaciones en sus arcas, que por demás corresponden a un patrimonio público, de ahí que en esta clase de procesos sea un Litis consorte necesario por pasiva.

Incluso, de acuerdo a lo regulado en el art. 134 del Código General del Proceso, *cuando exista litis consorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, ésta se anulará y se integrará el contradictorio*. La norma es de tal claridad que no deja dudas acerca del debido obrar del operador jurídico cuando un tercero ostenta tal calidad.

El art. 61 del C.G.P., habida cuenta de que el estatuto Procesal Laboral carece de normatividad expresa reguladora de la intervención de terceros, consagra la figura procesal del litisconsorcio

necesario, que se estructura cuando la relación de derecho sustancial sobre la cual debe pronunciarse el Juez está integrada por una pluralidad de sujetos, bien sean activos o pasivos, en tal forma que no puede escindirse en tantas relaciones aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente existan, sino que se presenta como una relación material única e indivisible con respecto a la pluralidad de tales sujetos. Se busca con la integración del contradictorio garantizar el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia, de vieja data, en sentencia del 14 de junio de 1971, se pronunció sobre este punto precisado:

“...la característica esencial del litisconsorcio necesario es el supuesto de que la **sentencia haya de ser única y de idéntico contenido para la pluralidad de partes** en la relación jurídico–procesal por ser única la relación material que en ella se controvierte; unicidad ésta que impide hacerle modificaciones que no puedan operar conjuntamente frente a los varios sujetos (...).” (Resaltos propios)

Y en sentencia del 4 de junio de 1970 manifestó que:

“En tal hipótesis, por consiguiente, un pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relación no proceder con la intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente de todos. Solo estando presente en el respectivo proceso la totalidad de los sujetos activos y pasivos de la relación sustancial, queda debida e íntegramente constituida desde el punto de vista subjetivo la relación jurídico-procesal, y por lo mismo, solo cuando las cosas son así podrá el juez hacer un pronunciamiento de fondo demandado. En caso contrario deberá limitarse a proferir fallo inhibitorio.”

Otros doctrinantes aducen que esta figura procesal se encuentra regida por dos principios: el de dispositividad y el de legitimación, y lo expresan de la siguiente manera:

“La compaginación de los dos principios enunciados, arroja el simple resultado: en las relaciones sustantivas, jurídicamente una con sujeto múltiple, cuando la ley no dispone de otra cosa, es siempre lícito obrar por sí solo, sea para demandar o para resistir a la pretensión, y solamente en el caso de que el proceso tenga por fin, la sentencia constitutiva o modificativa o extintiva y tal vez hasta la mero declarativa siendo entonces un proceso definitorio, el principio de la legitimación, como exigencia de conformidad de la pretensión procesal con la manera de ser plural-única o compleja única, predomina sobre el de la libertad y tiene que conformarse la pretensión o la resistencia con la integración de la parte mancomunada: la presencia de todos los varios uno, simultáneamente: la comunidad, la sociedad, el matrimonio, la filiación, la deliberación, la propiedad, son relaciones que no pueden cesar o mortificarse, sino con respecto a todos sus titulares.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Quintero, Beatriz y Prieto Eugenio, “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis SA, Tercera Edición, Bogotá Colombia, 2000. Pág. 395.

Es decir, la figura del litis consorcio necesario se define como la obligatoriedad de vincular a todas las personas a las que afecten directamente las resultas de una sentencia, pues comparten entre sí un derecho sustancial que no puede ser dividido o escindido, por lo que sin su comparecencia no se puede proferir decisión de fondo. En este términos razonó nuestro órgano de cierre mediante sentencia de radicación 59.027 de 2015 al referirse a esta figura, al indicar que:

“(…) lo que permite advertir que tal predicamento corresponde no a las afirmaciones del demandante en su escrito de demanda, sino, cosa distinta, a la naturaleza de la cuestión litigada en el proceso, de suerte que no porque el demandante plantee una particular postura de sus demandados frente a la pretensión del proceso, ellos adquieren ipso facto la calidad de litisconsortes necesarios, sino que es en atención a la cuestión que allí haya de definirse que se desprende o define esa peculiar calidad de litis consortes necesarios.

En otras palabras, el litisconsorcio debe tenerse por necesario cuando no fuere posible dictarse la sentencia si no es en presencia de todos quienes conforman la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, pues de resultar excluido alguno o algunos de quienes debieran quedar afectados por ella, ésta no estaría llamada a lograr su eficacia, con lo cual no adquirirá las características de inmutabilidad y definitividad propias a su firmeza, dado que frente a aquél o aquéllos no contará con oponibilidad alguna (…).”

Bajo esta óptica, NO resulta entendible cómo una parte de la que se requiere su comparecencia para emitir sentencia, se excluya para avalar una conciliación que en últimas, tiene los mismos efectos de aquella, y que en principio goza de presunción de validez por haberse realizado ante el juez, autoridad competente para velar que no se vulneren derechos ciertos e indiscutibles del afiliado, conforme al artículo 28 de la Ley 640 de 2001, y que produce efectos de cosa juzgada conforme lo dispone el artículo 3º del Decreto 1818 de 1998 (estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos).

Al respecto, en providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral del 4 de marzo de 1994, con radicado 6283 se precisó:

“cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del C.P. de T., el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obligatorias, sino que por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables”

Posición reiterada en sentencia con radicado 49526 del 30 de noviembre de 2016, donde se dijo:

“En un acuerdo conciliatorio, bien presentado ante un juez o ante un funcionario administrativo o delegado por ley para esas funciones, para que él imparta su aprobación en relación con el cuidado que debe tenerse respecto a que no se violentaron derechos ciertos e indiscutibles, pueden tocarse temas del derecho laboral ordinario donde se acuerden puntos específicos de orden legal, convencional o voluntariamente concedidos por el empleador o relacionados con la Seguridad Social. Pero, de todas formas, que hacen tránsito a cosa juzgada.

Son las partes, y solo ellas, las que llegan al acuerdo, el funcionario le imprime su aprobación formal y en adelante el documento que lo contiene, goza de la presunción de validez. La aprobación del funcionario se supedita a verificar que lo consignado fue lo que realmente se acordó y si no se violan derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, de manera que si considera que no se presenta la dicha violación, debe aprobar el pacto y hacer las advertencias sobre los efectos de cosa juzgada que desde ese momento lo amparan.

Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a COSA JUZGADA, se está asegurando que no podrá adelantarse contra ella acción judicial posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez deberá declarar probada, aún de oficio, la excepción de cosa juzgada. Esto debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una sentencia.

Sin embargo, puede ordenarse judicialmente la nulidad de un acta de conciliación cuando se afecte cualquiera de los elementos de un contrato, es decir, cuando se actúa sin capacidad o voluntad o cuando la referida actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, salvo, cuando se trate de la revisión del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública, situaciones en las que el mecanismo apto para la enervación de las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, es la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Es decir, si la parte que firmó el acuerdo considera que en el contenido de la conciliación existe un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos –con las salvedades anotadas-, o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, podrá acudir ante la jurisdicción mediante un proceso ordinario de competencia del Juez Laboral según las reglas que fija el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.”

(Subrayas de la Sala)

Ninguna modificación ha sufrido el criterio que hoy impera sobre la materia. Así, el acuerdo conciliatorio bajo la óptica del fallador, irradiaría sus efectos frente a Colpensiones, pese a que no se allanó, desconociéndose incluso su derecho de contradicción.

El art. 54 del Decreto 1818 de 1998 regula que en una conciliación, ante un acuerdo parcial, las pretensiones pendientes estaban llamadas a tramitarse por el procedimiento de instancia, igual situación que sucedía con la transacción parcial pues de acuerdo al art. 312 del CGP, el litigio versaría respecto de las personas o aspectos no comprendidos en ella. Similar intelección habría de realizarse en este caso.

Así las cosas, la Sala revocará el auto mediante el cual se impartió aprobación a dicha conciliación.

Incluso en un proceso de contornos similares, esta Sala de Decisión, presidida por la Magistrada Luz Amparo Gómez Aristizabal, dentro del proceso bajo radicado 05001 3105 016 2017 00083 01, el día 4 de febrero de 2020, dejó sin efectos el acuerdo conciliatorio al considerar que:

Teniendo en cuenta el recuento realizado, debe esta instancia determinar en primer lugar, si es posible una conciliación parcial en relación con la pretensión de ineficacia de traslado de régimen pensional formulada por la demandante frente a la AFP COLFONDOS S.A., para que se le tenga como válida y vigente su vinculación a



Colpensiones, administradora del RPMPD, advirtiendo que esta última entidad no cuenta con concepto favorable de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.

Se ha entendido la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el que las partes con la mediación de un tercero llegan a un acuerdo, evitando así el trámite de un proceso judicial, y si bien está concebida como una alternativa para la descongestión, no puede perderse de vista que el legislador ha sido celoso en su regulación, siendo más exigente para entidades de derecho público, es así como la Ley 23 de 1991 previó que sería efectuada por sus representantes legales, ello con la idea de tener un direccionamiento estratégico para la defensa jurídica de los intereses de la entidad, del Estado y del patrimonio de los ciudadanos; luego la Ley 446 de 1998 adicionó el artículo 65 B que tuvo por objeto la creación del comité de conciliación, entre otras, en las entidades y organismos de derecho público de orden nacional; a su turno, el Decreto Reglamentario 1716 de 2009 en su artículo 16, definió la naturaleza jurídica del Comité de Conciliación como una instancia administrativa de decisión y en su artículo 17 dispuso expresamente sobre su integración, norma que fue incorporada en el artículo 2.2.4.3.1.2.3. del Decreto 1069 de 2015, el cual a su vez fue modificado por el artículo 2 del Decreto 1167 de 2016 al señalar que las entidades públicas del orden nacional pueden invitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a participar en las respectivas sesiones, a efectos de lo cual tendrá derecho a voz y a voto.

Colpensiones no ha sido ajena a la aplicación de esta normatividad y tiene conformado el respectivo comité de conciliación y defensa judicial, llevándose al mismo todos los asuntos objeto de debate ante la justicia ordinaria laboral y allegándose el correspondiente concepto de la Secretaría Técnica de este órgano antes de la celebración de la audiencia regulada en el artículo 77 del C. P. T. y de la S.S., lo que ocurrió en el caso a estudio, determinándose en acta Nro. 908 del 18 de julio de 2017, no proponer fórmula conciliatoria, expresándose las razones para ello, siendo tal concepto obligatorio, no solo para la entidad en la que se profiere, sino para las autoridades públicas encargadas de agotar la etapa conciliatoria; luego no podía el juez de primer grado pasar por alto tal situación, la que además de obrar en el expediente fls. 147 y 149, fue ratificada insistentemente por la apoderada de la entidad en la etapa de conciliación, en que se aprobó el acuerdo entre la AFP COLFONDOS y la demandante, en relación con la ineficacia de traslado, y menos bajo el argumento de no ser COLPENSIONES parte en tal acto, pues indiscutible resulta que la conciliación judicial debe contar, como lo puso de presente la apoderada de la AFP, con la aquiescencia de todos los sujetos que conforman la parte pasiva, y para el caso la acción se dirigió en contra del Colpensiones y Colfondos S.A. y así fue admitida y tramitada, y menos cuando es precisamente COLPENSIONES la entidad que soporta las consecuencias jurídicas y económicas de tal acuerdo, razón por la que, desconociéndose una exigencia de ley, como lo es el concepto negativo del comité de conciliación y defensa judicial de la entidad pública, el acuerdo conciliatorio aprobado por el a quo carece de efecto alguno, debiéndose rehacer la actuación desde tal etapa procesal, en aras de la garantía al debido proceso prevista en el artículo 29 Superior.

En este orden de ideas, considera la Sala que tal irregularidad, aunque NO comporta una causal de nulidad (en tanto no se ubica dentro de las enlistadas en el artículo 133 del CGP<sup>2</sup>), sí ameritaría el ejercicio del control de legalidad consagrado en el artículo 132 del ibídem con el objeto de poner fin a esta anomalía y evitar situaciones que afecten los derechos procesales de

---

<sup>2</sup> Aunque Hernando Devis Echandía, en su obra *Nociones Generales del Derecho Procesal Civil*, 2009, Editorial Temis, pág. 807, advierte que es contradictoria la jurisprudencia toda vez que en ocasiones acoge el postulado Francés según el cual no hay nulidad cuando una norma expresa no la contempla, pero a su vez acepta la existencia de nulidades por violación al derecho de defensa en virtud de lo dispuesto en el art. 29 de la Constitución. En todo caso, reconoce que: *“Los defectos son como enfermedades de los actos procesales y del proceso, razón por la cual el derecho procesal contempla adecuados remedios, según su clase e importancia; remedios que procuran obtener la finalidad perseguida con el acto viciado, con el máximo de economía y eficacia, y que, por tanto, solo deben llegar al extremo de eliminar la actuación defectuosa cuando por otro camino es imposible obtener el mismo resultado y se trata de un vicio esencial. De ahí que el remedio de la nulidad no dese ser aplicado sino en casos especiales.”*

Aclarado lo anterior, tenemos que lo acontecido en este proceso, si bien no encuadra en una nulidad legal, se insiste, al NO estar taxativamente consagrada la actuación del despacho en el listado previsto por el legislador, lo cierto es que podría configurar una nulidad de naturaleza constitucional al lesionarse el derecho al debido proceso, figura a la que sólo es dable acudir cuando ningún remedio existe para subsanar la falencia que se presenta y que hizo nugatorio el derecho de defensa de la entidad demandada.

las partes, de ahí que lo procedente sea dejar sin efectos el acuerdo conciliatorio, debiéndose ordenar el envío del expediente al juzgado de origen para que agote las correspondientes etapas procesales y dicte sentencia. Lo anterior en concordancia con el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que establece que un operador jurídico es un verdadero director del proceso, con las facultades de saneamiento suficientes para lograr la finalidad de la administración de justicia.

De esta forma además se garantiza el derecho fundamental al debido proceso entendido como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra, indicando que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es por ello que las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de proceso requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley o los reglamentos. Esta obligación también cubre a las autoridades públicas, las cuales quedan obligadas por las normas que regulan el juicio o la actuación, sin que puedan, de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos términos o procedimientos que los beneficien y desconocer o ignorar aquellos que les sean desfavorables. De conformidad con lo anterior, el debido proceso se vulnera cuando no se siguen los actos y procedimientos establecidos en la ley y los reglamentos, las *formas propias de cada juicio*.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE**

**PRIMERO:** se **REVOCA** la decisión proferida el 27 de septiembre de 2019 a través de la cual se aceptó y aprobó una conciliación dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **SONIA HELENA PALACIO ESPINAL** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.868.426, contra **COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.**, y en su lugar se dispone dejar sin efectos el


acuerdo conciliatorio y se **ORDENA** al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín que agote las correspondientes etapas procesales y dicte sentencia.

**SEGUNDO:** sin costas en esta instancia.


Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se firma el acta en constancia por quienes en ella intervinieron.

(Firmas escaneadas)


Los Magistrados,



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 115 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 05 DE JULIO DE 2022

\_\_\_\_\_  
Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>